

1° JUZGADO PENAL - Sede Central

EXPEDIENTE : 01797-2010-0-1903-JR-PE-01

ESPECIALISTA : ARMANDO AVALOS PANDURO

DEMANDANTE : MC AULEY, PAUL MICHAEL JOHN THOMAS

DEMANDADO : MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIÓN NUMERO: CINCO

Iquitos, doce de julio

Del dos mil diez.-

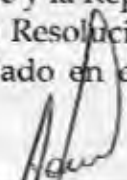
VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda de Habeas Corpus, interpuesto por **PAUL MICHAEL JOHN THOMAS MC AULEY** sobre proceso de **HABEAS CORPUS**, dirigida contra el **MINISTERIO DEL INTERIOR** representado por el **Procurador Público** y contra **EL MINISTRO DEL INTERIOR OCTAVIO E. SALAZAR MIRANDA**; y demás recaudos que anteceden:-----

Y CONSIDERANDO:-----

PRIMERO.- Que, a fojas dos a veintisiete, corre la demanda interpuesta por **PAUL MICHAEL HOHN THOMAS MC AULEY** religioso de la Congregación de los Hermanos Misioneros **LA SALLE**, sobre proceso de **HABEAS CORPUS**, dirigida contra el **MINISTERIO DEL INTERIOR** representado por el **Procurador Público** y contra **EL MINISTRO DEL INTERIOR OCTAVIO E. SALAZAR MIRANDA** al haberse vulnerado sus derechos constitucionales de la libertad de tránsito, libertad de asociación, debido proceso, falta de motivación de la resolución administrativa derivada de la **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0571-2010-IN/1601**, de fecha once de Junio del año en curso, que resuelve cancelar la residencia en el territorio nacional debiendo abandonar el país en el plazo perentorio de siete días bajo apercibimiento de dictarse su expulsión del país impedido de ingresar al territorio nacional.-----

SEGUNDO: El demandante expresa que se le ha vulnerado sus derechos constitucionales garantizados en la Constitución del Estado y los Convenios Internacionales y esta vulneración proviene de la Resolución Ministerial N° 0571-2010-IN/1601 emitida por el Ministerio del Interior (11-06-2010) que resuelve cancelar su residencia que ostenta como religioso y funda su demanda:

- a) Que la resolución Ministerial N° 0571-2010-IN/1601: Señala que en su calidad de ciudadano extranjero preside la Asociación sin fines de lucro "Red Ambiental Loretana", inscrita el diez de febrero del dos mil diez y que mediante dicha asociación viene realizando actos de protesta contra el Estado Peruano en la ciudad de Iquitos. No precisa que la actividad que realiza lo hace en su condición de religioso de la Congregación de Hermano de La Salle, que se enmarca dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y del Acuerdo Internacional ente la Santa Sede y la República del Perú;
- b) Que al emitirse la referida Resolución se ha vulnerado el **Principio del Debido Procedimiento**, regulado en el artículo IV numeral 1.2 del Título


ARMANDO AVALOS PANDURO
Secretario Judicial
1er. Juzgado Penal de Maynas

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444;

c) No describe o establece cuáles son o en que consisten los hechos contra el Estado Peruano, solo realiza una descripción genérica de haber participado en actos y marchas en la ciudad de Iquitos en protestas contra del Estado.

e) Hace mención a actos que constituyen alteración del orden público; sin embargo precisa que no ha realizado actos contra la paz pública regulados en los artículos 315 al 318 del Código Penal, y no ha sido denunciado e investigado por la supuesta realización de dichos delitos.

f) Que, la referida no ha tenido en cuenta, que las actividades que realiza se encuentran enmarcadas dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y los demás documentos de carácter religioso que guían la vida de las congregaciones en el Perú.

g) No ha tenido en cuenta que las actividades que realizan los religiosos en nuestro país se encuentran enmarcados dentro del Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú (Convenio Inter Apostolicum Sedem et Peruvianam Rem Publicam), firmado el 19-07-1980 y ratificado el 26-07-1980, las actividades que realiza la Red Ambiental Loreto, son parte de las obras de la Congregación Religiosa de los Hermanos de LA SALLE.

Motivo por el cual interpone la presente demanda en resguardo de su derecho como extranjero religioso residente en el Perú **de transitar o salir del territorio peruano**; invoca como fundamento de derecho el artículo 2°, numeral 11) de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 25° numeral 6) del Código Procesal Constitucional. -----

TERCERO: Que, el inciso 1°, del artículo 200° de la Constitución establece que el proceso de hábeas corpus, procede "ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos". En este sentido, el ámbito de protección del proceso de hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con este¹. -----

CUARTO: Es necesario tener en cuenta que: el Habeas Corpus Restringido, es el que opera cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una serie restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "le limita en menor grado". Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbaciones carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc². El habeas Corpus Conexo y Excepcionales se da dependiendo del acto lesivo, si bien no hace referencia a la privación o

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional. STC Exp. N° 6218 - 2007 - PHC/TC. Fundamento

² SAR. A. OMAR. *Constitución Política del Perú, con la jurisprudencia, artículo por artículo, del Tribunal Constitucional*. 3era. Edición. Editorial Nomos & Thesis.

restricción de la libertad, pero si protege también aquellos derechos innominados previstos en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado como es el debido proceso, entre otros. -----

QUINTO: Que, el proceso constitucional se caracteriza por carecer de etapa probatoria, en la cual se puedan actuar las diversas pruebas adjuntadas por las partes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Esto, a su vez, implica una responsabilidad implícita que entraña la carga de probar a las partes que acuden a la vía constitucional de adjuntar medios probatorios idóneos que sean suficientes para crear en el juzgador un criterio respecto del derecho alegado³. Por otro lado, el Código Procesal Constitucional dispone, en su artículo 2°, que los procesos constitucionales proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Asimismo, cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización.-----

SEXTO: Que, durante la investigación indagatoria se realizaron las siguientes diligencias: La declaración indagatoria del demandado **PAUL MICHAEL JOHN THOMAS MC AULEY** sostuvo lo siguiente: a) Se ratifica, de su demanda constitucional de habeas corpus; precisando que el Habeas Corpus esta dirigido contra el Ministerio del Interior representado por el Procurador Público y amplia y precisa su demanda contra el Ministro del Interior Octavio E. Salazar Miranda. b) Agrega que se ha vulnerado su derecho de defensa, el debido proceso y la tutela jurisdiccional toda vez que en ningún momento ha tenido conocimiento de que se le haya aperturado investigación por parte de Seguridad del Estado Peruano con sede en la ciudad de Iquitos, teniendo recién conocimiento de la existencia de un atestado así como también del dictamen de asesoría legal de la Dirección General de Migraciones y Naturalización y el acta de la Comisión de Extranjería por medio de la Resolución Ministerial que se me fuera notificado el jueves treinta de junio del presente año a las nueve de la mañana. c) Es miembro de la Congregación Religiosa de la Salle, dedicado a la educación de derecho a la naturaleza, derechos humanos y fue enviado por sus superiores en enero del año dos mil a ésta ciudad de Iquitos, para fundar una comunidad religiosa en la ciudad de Iquitos, los primeros cuatro años se dedicaba a la asesoría de la Pastoral Juvenil en la Región selva que abarca a los Obispos de Yurimaguas, Moyobamba, Iquitos, San José de Amazonas y Requena. Desde esa experiencia aceptó la sugerencia de egresados de la Pastoral Juvenil para formar una asociación civil dedicado al monitoreo de los recursos naturales y de asegurar los derechos de los habitantes en la Región Loreto, siendo su trabajo una labor de iglesia en términos del buen cuidado de los recursos naturales. d) Refiere que en su condición de presidente en la Red Ambiental Loretana como religioso de la Congregación de Hermanos de La Salle no se le ha vulnerado, ni privado el derecho a la libertad de tránsito por parte del demandado. e) Contra La Resolución

³ Sentencia del Tribunal Constitucional. STC Exp. N° 3484 – 2005 – PHC.

Ministerial N° 0571-2010-IN/1601, de fecha once de junio del dos mil diez; interpuso por la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela jurisdiccional una acción de amparo y una medida cautelar, asimismo, queda pendiente de interponer un recurso impugnatorio contra la Resolución Ministerial en la Vía Administrativa. f) Su misión es de carácter educativo, y ofrecer información a los actores de la selva (indígenas, ribereños, urbanos y otros) sobre el buen manejo de los recursos naturales en particular somos guiados por la enseñanza social de la iglesia y específicamente por los documentos denominada APARECIDA que es una compilación de documentos eclesiales, ahí están los lineamientos y criterios para un trato respetuoso de los vivientes de la selva, sean seres humanos o recursos naturales. g) En ningún momento, ha atentado contra el orden público, y que su actuación ha sido siempre pedir la aplicación de las leyes nacionales e internacionales que son los fundamentos de una sociedad ordenada y justa. h) Es Laico Consagrado de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. i) Nunca ha sido amenazado por los demandados a su libertad de tránsito por el país, pero que al recibir la Resolución Administrativa se dio cuenta de que su derecho al libre tránsito ha sido afectado. j) Solicita una medida de protección para quedarse en Loreto, toda vez que el día de mañana (08-07-2010) se vence el plazo para retirarse del país conforme a la Resolución Ministerial, además nunca ha tenido problemas toda vez que vive en el Perú desde hace veinte años y diez años en Loreto.

SEPTIMO: Debemos tener presente que el estado democrático de derecho supone que todo poder organizado en la presencia de la estructura estatal debe responder a determinados parámetros de juridicidad⁴. Lo que históricamente se dice que en el pasado se identificó con una concepción legalista o de supremacía de la ley (Estado Legal) y que hoy en día se asumen como una fórmula identificados en la noción de valores materiales de orden superior, identificados con la noción por ciento mucho más amplia de derecho (Estado de derecho)⁵, lo que quiere decir la sumisión del Estado de derecho orientada con el principio de soberanía que no es otra que la democrática, sustentándose en la voluntad del Pueblo a través del derecho, en especial de la Constitución Política del Estado.

OCTAVO: De otro lado se tiene que el debido proceso previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución establece la observancia del debido proceso que persigue garantizar que cuando una persona pretenda la defensa de su derechos la solución de un conflicto jurídico o la aclaración de una incertidumbre jurídica, sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de garantías mínimas principios y derechos fundamentales, el debido proceso no solo es aplicable en sede jurisdiccional, sino también se extiende en sede administrativa. El debido proceso distingue

⁴ Sanchez Viamonte, Carlos .El Constitucionalismo. Sus Problemas. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957, p.22

⁵ García Pelayo, Manuel. " Estado Legal y Estado Constitucional de Derecho" En Lecturas sobre temas constitucionales" N° 1, CAJ. Lima 1988 p 27

lo que se conoce como "*debido proceso formal y material*" y "*garantías formales y materiales del proceso*" si bien comparten el mismo significado pero se diferencia el "*debido proceso formal*" se encuentra constituido por aquellas garantías vinculadas al rito del proceso, es decir por el respeto a los derechos de defensa, motivación, pluralidad de instancias entre otras y el "*debido proceso material*" está relacionado con la observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad; significa que además de observar las garantías del debido proceso formal o el debido proceso procesal las decisiones debe ser razonables y proporcionales.-----

NOVENO: Que, analizados los autos se advierte que los hechos y petitorio de la demanda sí están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegidos por el habeas corpus, en la medida que la resolución administrativa - **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0571-2010-IN/1601**, expedida por el **MINISTRO DEL INTERIOR OCTAVIO E. SALAZAR MIRANDA** de fecha once de Junio del dos mil diez, de fojas cinco resuelve cancelar la residencia en el territorio nacional del demandante como religioso; que abandone el país dentro del plazo perentorio de siete días calendarios contados a partir de la notificación con la resolución y bajo apercibimiento de dictarse su expulsión del país e impedido de ingresar al territorio nacional; sin embargo se aprecia de que no se le ha dado la oportunidad al hoy demandante dentro del debido proceso administrativo a ejercer su derecho a la defensa, previsto en el artículo ciento treinta y nueve inciso catorce de la Constitución Política del Estado que establece " El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso" que constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso, asimismo se pretende restringir su derecho a la asociación " Red Ambiental Loreana" que reconoce el artículo 2, inciso 13, de la Constitución, este derecho garantiza al asociado el hoy demandante el pleno ejercicio o goce de los derechos que se derivan de dicha condición. Significa esto que los derechos de un asociado están, reconocidos en sus respectivos estatutos de fojas once de manera que un atestado no puede restringir o limitar esos derechos de manera injustificada sin cumplir las exigencias del principio de proporcionalidad. La restricción o limitación del derecho de asociación resulta injustificada a la luz de este principio, lo que deviene en una intervención ilegítima del derecho de asociación por tanto, es una afectación de este derecho. Con relación a la indebida motivación de la resolución Ministerial su contenido es meramente enunciativa no precisa los cargos y descargos del hoy demandante en la supuesta investigación preliminar contenida en el atestado en referencia lo que conlleva a la afectación del debido **procedimiento administrativo**, afectando por ende el derecho a su residencia y amenaza de su libertad de tránsito, con el argumento de haberse realizado investigaciones establecidos en el Atestado N° 030-2009-V-DIRTEPOL-RPL-DIVSEEST-DSE-SEX (18-08-2009) del Departamento de Seguridad del Estado de la V Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú con sede en Iquitos en razón que todo ciudadano tiene derecho a elegir su lugar de residencia a transitar por el

territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería y el derecho de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad debidamente motivadas; En tal sentido se ha afectado el derecho sustantivo el debido proceso procesal, al constituir un acto arbitrario del poder público, al no haberse permitido el ejercicio del derecho a la defensa del hoy demandante previo a la expedición de la resolución Ministerial en referencia, que no se tomó en cuenta, lo que constituye un acto de arbitrariedad contrario al Estado de Derecho democrático, lo que también afecta y amenaza la libertad de tránsito que es cierta y es inminente que proviene de una decisión administrativa que no ha sido debidamente motivada por parte del demandado, asimismo afecta, el derecho a la residencia, el derecho a la asociación. Por las razones expuestas, estando a los preceptos legales glosados y de conformidad con lo dispuesto en la ley veintiocho mil doscientos treinta y siete, y de conformidad con los artículos veinticinco inciso 6 y último párrafo de la misma norma y artículo treinta y cuatro del Código Procesal Constitucional se debe disponer el cese de la vulneración al derecho de la libertad de tránsito del demandante como residente extranjero, ni ser impedido de ingresar dentro del territorio Nacional. Por las razones expuestas, estando a los preceptos legales glosados y con la facultad que confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, Administrando Justicia a Nombre de la Nación. **FALLO: DECLARANDO FUNDADA** el proceso Constitucional de **HABEAS CORPUS**, interpuesto por **PAUL MICHAEL JOHN THOMAS MC AULEY** religioso de la Congregación de los Hermanos Misioneros LA SALLE, contra **MINISTERIO DEL INTERIOR REPRESENTADO POR EL PROCURADOR PÚBLICO Y CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR OCTAVIO E. SALAZAR MIRANDA**. En consecuencia **ORDENO** el cese de los actos que obstaculicen, perturben o incomoden el ejercicio del derecho al libre tránsito del demandante como residente extranjero en el territorio Nacional Peruano y a no ser expulsado del país, ni impedido de ingresar al territorio nacional. **CONSENTIDA O EJECUTORIADA** que sea la presente resolución publíquese en el Diario Oficial "El Peruano" con las formalidades de ley, y **ARCHÍVENSE** los autos en el modo y forma de ley en secretaría del Juzgado. Hágase saber la presente resolución. DESE aviso a la Sala Penal.----


ARMANDO IVALOS PANDURO
Secretario Judicial
1er. Juzgado Penal de Maynas